

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL  
Manizales, veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021).**

**SENTENCIA DE TUTELA No.87**

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por los señores **MARÍA DORALBA LLANO DE RODRÍGUEZ Y JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ SANTAFE** en contra de la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE LA ALCALDÍA DE MANIZALES Y LA COMISARIA SEXTA DE POLICÍA DE MANIZALES** y donde fue vinculada **LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DE MANIZALES**, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.

**I. ANTECEDENTES**

Refieren los accionantes que en el año 1991 la Caja de Vivienda Popular del Municipio de Manizales ejecutó un plan de urbanización en el sector de la Carola de la ciudad de Manizales y fue la encargada de gestionar la realización de los procesos administrativos para el registro de los trámites de urbanización.

Que una vez finalizados los proyectos de construcción, se procedió a ofertar los inmuebles para su adquisición mediante el otorgamiento de subsidios con una serie de beneficios, por lo que mediante escritura pública No. 633 del 10 de febrero del año 1997 extendida en la Notaría Cuarta de Manizales, adquirieron el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 100-99018, ubicado en la carrera 9 C No.57F-64 barrio la carolita en la ciudad de Manizales, el cual fue adquirido en las condiciones que fue entregado por la Caja de la Vivienda Popular.

Refiere que el inmueble fue entregado desde el mismo momento de su adquisición en el año 1997, con unos “bajos” los cuales contaban con un acceso independiente por la carrera; y que la estructura de la vivienda ha sido siempre la misma y no ha sido modificada en ningún momento durante 25 años.

Manifiesta que el año pasado recibieron una comunicación por parte de la Inspección Sexta de Policía en la cual se indicaba la apertura de un proceso administrativo en su contra, por la presunta violación de normas urbanísticas, en tanto el ingreso a los “bajos” de la vivienda, no permite que el andén cuente con las dimensiones necesarias para el tránsito de las personas.

Que durante el trámite adelantado ante la Inspección Sexta de Policía, se les informó que se les impondría una multa y se les ordenaría realizar una obra para eliminar las escaleras de ingreso a los bajos; situación que podría tener lugar en la audiencia que se encuentra programada para el mes de julio del año en curso.

Que ante la anterior circunstancia, elevaron un derecho de petición ante la Secretaría de Planeación, solicitando la legalización del predio, la cual negó la solicitud elevada, argumentando que no se podía efectuar ninguna gestión de legalización, por cuanto el predio se encontraba infringiendo normas de carácter urbanístico, sin plantear ninguna alternativa u opción para solucionar dicho problema.

Aducen que si se llegara a realizar las adecuaciones que se solicitan, no permitiría el acceso a los bajos de la vivienda, lo que generaría un detrimento patrimonial en tanto son personas de la tercera edad y que su subsistencia depende de los ingresos generados por el arrendamiento generado en los bajos de la vivienda y que tampoco cuentan con los recursos necesarios para asumir el pago de una multa o una posible demolición del ingreso a los bajos, afectando así la posibilidad de conservar el contrato de arrendamiento con los arrendatarios de dicho inmueble.

Dicen que según las condiciones de la vía pública donde se ubica el inmueble, es posible realizar la ampliación del andén actualmente existente, toda vez que la vía se encuentra compuesta por 4 carriles con una baja densidad de tráfico, por lo que podrían comprometerse a realizar las adecuaciones necesarias para correr la baranda de seguridad de las escaleras y permitir una ampliación adecuada del andén.

Por último, manifiestan que la actual situación podría representar una clara afectación al principio de confianza legítima y la seguridad jurídica, toda vez que durante todo el tiempo de habitación del inmueble, nunca se ha generado ninguna clase de requerimiento u observación por parte de la administración municipal, por lo cual, mal harían las autoridades administrativas en restringir un derecho de forma abrupta, cuando este se ha venido ejecutando por un periodo de tiempo considerable, aunado al hecho de que los accionantes no fueron los que generaron la presunta vulneración de normas de carácter urbanístico.

## **II. PRETENSIONES**

Solicitan entonces sean tutelados sus derechos constitucionales y que se ordene a las ejecutadas a finalizar el trámite de policía adelantado en su contra teniendo en cuenta lo expuesto en los hechos de la acción de tutela.

## **III. PRUEBAS**

Aportadas por la accionante: Fotografías de la vivienda, Certificado de tradición del bien inmueble, Historia Clínica, planos iniciales de la vivienda sin sellos, planos de la vivienda con sello de la Caja de la vivienda Popular.

Aportadas por la **SECRETARIA DE PLANEACIÓN**: Con la contestación de la demanda anexa respuesta a derecho de petición.

Aportada por la **INSPECCIÓN SEXTA URBANA DE POLICÍA**: Con la contestación de la demanda, aportaron la copia del expediente con radicado No. 2020-7698.

#### **IV. TRÁMITE**

Mediante auto fechado 13 de mayo de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante, de igual forma se dispuso la notificación a las entidades accionadas y se dispuso la vinculación de LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DE MANIZALES, para que se sirvieran dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitaran las pruebas que pretendieran hacer valer para su defensa.

#### **V. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.**

La **SECRETARIA DE PLANEACIÓN** dio respuesta a la acción tuitiva, donde manifestó que existe falta de legitimación en la causa por parte de ese despacho, en tanto lo pretendido por los accionantes escapa de sus competencias, toda vez que no son los responsables de atender dichos requerimientos pues estos no son de su resorte.

Aunado a ello, manifiestan que respecto al derecho de petición al que hacen alusión los accionantes y que fuera elevado ante esa secretaria, dieron respuesta de fondo a los accionantes mediante oficio GED 15276-2021, el cual anexan con la contestación.

La **INSPECCIÓN SEXTA URBANA DE POLICÍA** manifestó que las pretensiones de la presente acción de tutela no están llamadas a prosperar por la improcedencia del amparo solicitado, en tanto los accionantes enfrentan proceso verbal abreviado de la ley 1801 de 2016 dentro del expediente con radicado 2020-7698, el cual ha contado con todas las garantías necesarias para su buen desarrollo, no evidenciando un perjuicio irremediable del que puedan alegar los accionantes y reiterando que no es la acción de tutela el medio idóneo para ventilar el asunto puesto en consideración en tanto se está tramitando el proceso policivo, en donde está programada continuación de la audiencia para el día 21 de julio de 2021.

Refiere con relación a la calidad de sujetos de especial protección constitucional que afirman tener los accionantes, respecto del principio de subsidiariedad, debe tenerse en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T- 375 de 2018 y que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados.

Manifiestan que atendiendo el criterio de especialidad normativa el asunto que ventilan los accionantes se trata presuntamente de comportamientos contrarios a la integridad

urbanística, artículo 135 de la ley 1801 de 2016. Dichos asuntos se despachan a través del proceso verbal abreviado, contenido dentro del proceso único de policía que describe la citada ley. En el artículo 138 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estableció el legislador “El ejercicio de la función policial de control urbanístico, caducará en tres (3) años sólo cuando se trate de: parcelar, urbanizar, intervenir y construir en terrenos aptos para estas actuaciones.” Del informe contenido en oficio SGM VC- 0312 de 2020, se destaca que “(...) *Se observa la construcción del nivel N-1 sobre dicha vivienda, para lo cual crearon el acceso sobre el andén, por lo que se puede determinar una clara INVASIÓN AL ESPACIO PÚBLICO.*” Sobre el particular dispone el artículo 226 de la ley 1801 de 2016 **“CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.** *Cuando se trate de hechos de perturbación de bienes de uso público, bienes fiscales, zonas de reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al espacio público, bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés social, cultural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de la acción policiva. La autoridad de Policía comunicará la iniciación de la actuación al personero, quien podrá pedir directamente, o por intermedio de delegado, que se le tenga como interesado en el proceso.*”

Finaliza diciendo que esa autoridad de policía dentro del trámite del proceso verbal abreviado del expediente 2020-7698, no ha concluido la etapa descrita en el literal C del numeral 3 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016, por lo que considera que cualquier evaluación de las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto podría viciar el trámite policivo que no ha concluido y que las afirmaciones de los accionantes obedecen precisamente al conocimiento que tiene su apoderado del expediente y las posibles resultas en caso de que el Municipio de Manizales a través de la dependencia que corresponda no otorgue autorización o reconcomiendo de las obras que presuntamente contravienen la ley en materia urbanística y de espacio público.

La **CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DE MANIZALES** pese a estar notificada de la acción de tutela no dio respuesta a la acción tuitiva.

## **VI. PROBLEMA JURÍDICO.**

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de los accionantes al ser llamados a un proceso policivo por comportamientos contrarios a la integridad urbanística el cual podría resultar en contra de sus pretensiones.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

## VII. CONSIDERACIONES

### Subsidiariedad de la acción de tutela.

La acción de tutela fue consagrada en la Constitución con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de las personas cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o por particulares para los casos que ha establecido la ley

No obstante, la solicitud de amparo no sustituye los medios ordinarios de defensa ante los jueces o autoridades administrativas por lo que goza de un carácter subsidiario y residual y así lo ha tratado la Corte en su sentencia T-369 de 2010, en la cual se indicó:

*“...3.1. La Constitución Política de Colombia en el artículo 86 prescribe sobre la tutela que: “[...] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.*

*Así las cosas, esta acción es de carácter excepcional y subsidiaria, es decir, la acción de tutela sólo procede **cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial**. De tal suerte, que este mecanismo subsidiario no puede desplazar ni sustituir las vías judiciales ordinarias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado en abundante jurisprudencia que “cuando el juez de tutela deba decidir en relación con la vulneración o amenaza de un derecho fundamental habrá de verificar si existe o no otro medio de defensa judicial ante el cual pueda ventilarse el conflicto.”*

*Esta restricción a la procedibilidad de la tutela no resulta sin fundamento o simplemente caprichosa. En realidad, tiene el objetivo de salvaguardar las competencias atribuidas por la constitución y la ley a las diferentes autoridades judiciales. De esta forma, se garantizan la independencia judicial y uno de los fundamentos del debido proceso como la aplicación de los procedimientos legalmente establecido para cada caso.*

*...3.4. Ahora, la Corte también ha establecido algunas reglas en virtud de las cuales excepcionalmente puede proceder una acción de tutela a pesar de existir un mecanismo judicial alterno para la defensa del derecho en cuestión, cuando aquel “(i) o no resulta idóneo para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados, o (ii) la tutela es necesaria como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”*

*La Corte Constitucional ha reiterado en múltiples oportunidades que únicamente procede el amparo constitucional cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial o, en el evento en el cual, a pesar de existir el medio de defensa, este no resulta idóneo para la protección del derecho y se hace necesaria la adopción de una medida transitoria que evite la ocurrencia de un daño irremediable. De manera expresa ha señalado que “**en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional...**”*

De igual forma la Corte en sentencia de unificación SU-130 de 2013, frente a la subsidiariedad de la acción de tutela, expreso:

*“De acuerdo con su diseño constitucional (Art. 86), la acción de tutela ha sido considerada como un mecanismo de defensa judicial, de carácter subsidiario y residual, en virtud del cual, es posible, a través de un procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente determinados por la ley.*

*3.2. El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.-A este respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.*

*Bajo esa orientación, ha dicho la Corte que “la acción de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”.*

*3.3. Este elemento medular de la acción de tutela, la subsidiariedad, adquiere fundamento y se justifica, en la necesidad de preservar el orden regular de asignación de competencias a las distintas autoridades jurisdiccionales, con el objeto no solo de impedir su paulatina disgregación sino también de garantizar el principio de seguridad jurídica. Ello, sobre la base de que no es la acción de tutela el único mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales, pues existen otros instrumentos, ordinarios y especiales, dotados de la capacidad necesaria para de manera preferente, lograr su protección.*

***3.4. Así las cosas, los conflictos jurídicos en los que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, en principio, deben ser resueltos a través de los distintos medios ordinarios de defensa previstos en la ley para estos efectos, y solo ante la ausencia de dichos mecanismos o cuando los mismos no resulten idóneos o eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es procedente acudir de manera directa a la acción de amparo constitucional.***

*3.5. No obstante lo dicho, conviene precisar, que la idoneidad o eficacia de otras vías judiciales, debe ser analizada por el juez de tutela frente a la situación particular y concreta de quien invoca el amparo constitucional, como quiera que una interpretación restrictiva del texto superior conllevaría la vulneración de derechos fundamentales, si con el ejercicio de dichos mecanismos no se logra la protección efectiva de los derechos conculcados”*

**De la procedencia excepcional de la acción de tutela para cuestionar una decisión administrativa sancionatoria emitida en virtud de la actividad de policía.**

Aun cuando en voces de la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no constituye la herramienta adecuada para debatir los actos de determinadas autoridades públicas, por cuanto, para tal efecto el ordenamiento jurídico prevé otros medios de defensa judicial, excepcionalmente se ha fijado la posibilidad de acudir al amparo en aquellos casos en los que se trate de un acto manifiestamente arbitrario, frente al cual, la tutela se muestra como el mecanismo ideal para la defensa del derecho conculcado.

Así lo sostuvo de manera precisa la Corte Constitucional en reciente jurisprudencia, Sentencia T-385 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas al señalar:

*“(...) 6. En armonía con lo expuesto y para lo que interesa a la presente causa debe indicarse que no obstante la jurisprudencia constitucional señalar, cuando se trata de actos administrativos, que antes de acudir al mecanismo de protección constitucional se deben agotar las vías ordinarias, **salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar**, la Sala de Revisión advierte que la conjunción de diferentes elementos impiden una protección inmediata de los derechos objeto de análisis.*

*En tales condiciones, en este evento refulge la acción de tutela como el mecanismo idóneo para dar protección inmediata y definitiva de los derechos al debido proceso administrativo en sus componentes de legalidad, defensa y contradicción de un ciudadano al que se le aplicaron las medidas dispuestas en el CNPC por incurrir en un supuesto comportamiento que afecta las relaciones entre las personas y las autoridades.*

*Las anteriores consideraciones son plenamente aplicables en esta oportunidad pues **las acciones contencioso-administrativas, no resultan idóneas y eficaces para proteger los derechos fundamentales del actor por no ser lo suficientemente rápidas y efectivas respecto del trámite policivo en el que se impuso como sanción el pago de una multa y la realización de una actividad pedagógica**, debido precisamente a la dificultad para acceder a las mismas.*

*Así, el debate advertido en este caso encuentra en la acción de tutela el escenario de discusión idóneo y eficaz para su solución, al margen incluso de las consecuencias que el transcurrir del tiempo y el no pago de las sanciones (pecuniaria y medida pedagógica) puede generar en el accionante con ocasión de las normas que consagran los efectos respecto de su incumplimiento (...)”* Negrilla del Juzgado.

## I. CASO CONCRETO

La parte actora interpone este mecanismo sumarial, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de los accionantes al ser llamados a un proceso policivo por comportamientos contrarios a la integridad urbanística el cual podría resultar en contra de sus intereses..

La acción de tutela fue admitida y notificada a **la INSPECCIÓN SEXTA URBANA DE POLICÍA Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**, quienes se pronunciaron frente al mecanismo constitucional impetrado, en donde indicaron que debe ser negada la presente

acción tuitiva en tanto no existe vulneración de derechos y en todo caso el accionante tiene otro mecanismo legal para ventilar el asunto.

## CONCLUSIÓN

Estima el accionante que los accionados le han vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas por haber iniciado un proceso policivo por comportamientos contrarios a la integridad urbanística que podría resultar negativo a sus intereses.

Según lo obrante en el proceso y la jurisprudencia arriba anotada, la Corte ha determinado que la acción de tutela no procede como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

De conformidad con lo anterior, se tiene que la persona que solicita el amparo deberá demostrar de forma suficiente la necesidad de la medida para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual se estructura siempre que (i) se esté ante un perjuicio *inminente* o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser *grave*, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran medidas *urgentes* para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, atender las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser *impostergables*, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.

A juicio de este despacho y de lo obrante en el proceso es claro que no se cumple con el requisito de subsidiariedad en la presente acción, ya que es evidente que los accionantes cuentan con otra vía, otro medio de defensa, un procedimiento claro para ventilar lo que aquí han alegado, tanto así, que dicho proceso se encuentra en curso, habiendo sido notificados de dicho trámite y actuando en el mismo, sin que a la fecha esté haya sido resuelto de fondo; pudiéndose determinar adicionalmente que los accionantes impetran esta acción con miras a omitir uno de los posibles resultados del proceso policivo abreviado que se sigue en su contra en la Inspección Sexta Urbana de Policía de Manizales, en tanto se encuentran afirmando que no tienen la capacidad económica de asumir multas ni presuntas demoliciones y que ello afectaría su mínimo vital, cuando ni siquiera se ha proferido una sentencia que así lo establezca y solicitando al Despacho que se ordene a dicha autoridad emitir un pronunciamiento en determinado sentido, esto es, teniendo en cuenta lo manifestado por ellos en esta acción, realizando por tanto solo presunciones sobre el resultado del mismo; pues itérese que la audiencia de que trata el proceso policivo abreviado se encuentra suspendida hasta el próximo 21 de julio de 2021, sin que se pueda deducir desde ya que los accionantes serán objeto de sanciones o multas o que la autoridad accionada encargada de resolver el mismo no tenga en cuenta sus argumentos al momento de proferir la decisión.



Adicionalmente, en caso de existir inconformidad sobre el fallo que sea proferido en su momento, no está de más recordar que según el Código Nacional de Policía y Convivencia, los vencidos aun cuentan con el recurso de apelación frente a la decisión, que será resuelta por las autoridades administrativas correspondientes, reafirmando aún más la falta de subsidiariedad en el presente asunto.

Así las cosas y al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad que envuelve a la acción de tutela y al no poder el juez constitucional entrar a entrometerse dentro del proceso policivo abreviado seguido en contra de los accionantes, con base en los argumentos por ellos esgrimidos; no le es posible a este Despacho conceder el amparo deprecado por parte de los señores **MARÍA DORALBA LLANO DE RODRÍGUEZ Y JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ SANTAFE**, ya que ante tal situación es la INSPECCIÓN SEXTA URBANA DE POLICÍA la encargada de resolver el conflicto que se suscita entre las partes aquí intervinientes, por lo que al existir otro mecanismo judicial idóneo de defensa, el presente trámite se torna improcedente.

Adicionalmente debe decirse que si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la citada en precedencia, ha establecido que aun existiendo otro medio de defensa puede proceder la tutela transitoriamente cuando se demuestre la ocurrencia tuitiva de un perjuicio irremediable que imponga la actuación urgente e inmediata del juez de tutela, esta circunstancia no se cumple en el presente caso, pues pese a ser los accionantes personas de la tercera edad y afirmar que sus subsistencia depende del arrendamiento de los bajos, cuyo ingreso consideran podría demolerse, estas circunstancias para el caso particular no los hace estar frente a un perjuicio irremediable, ni sujetos de especial protección per se, pues las posibles afectaciones que ellos consideran sufrir, aún no han ocurrido y no se tiene certeza de que así sea, por lo que se está frente a una simple expectativa, y teniendo en cuenta la fecha en la que se reanudará la audiencia en dicho proceso, no se ve tampoco que pese a su edad no puedan esperar a la misma y el fallo dentro de dicho proceso, y por último, tampoco se probó que en el proceso policivo que se adelanta en su contra se les haya violado el debido proceso, o exista una circunstancia similar que amerite que esta juez constitucional les de alguna orden particular como producto de esta acción.

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

## **RESUELVE**

**PRIMERO: DENEGAR POR IMPROCEDENTE** la presente acción de tutela promovida por los señores **MARÍA DORALBA LLANO DE RODRÍGUEZ Y JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ SANTAFE**, en contra de la **INSPECCIÓN SEXTA URBANA DE POLICÍA y SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE MANIZALES** y donde fue vinculada la **CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DE MANIZALES**, por lo dicho en esta providencia.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

**TERCERO:** De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**VALENTINA SANZ MEJÍA**  
**JUEZ**

**Firmado Por:**

**VALENTINA SANZ MEJIA**  
**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS**

Código de verificación: **643e0803171d484cf38430298fbec920bdbf314b3dd20c2b44f91081d7079cef**

Documento generado en 27/05/2021 01:44:37 PM